

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA LABORAL

Medellín, septiembre 23 de 2020

Radicado: 05001 31 05-002-2018-00197-01  
Demandante: JULIO ERNESTO ECHAVARRÍA Y GRISELDA ESTHER  
CIFUENTES DE ECHAVARRÍA  
Demandado: PORVENIR SA  
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA  
Tema: Pensión de sobrevivientes

La sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral promovido por JULIO ERNESTO ECHAVARRÍA Y GRISELDA ESTHER CIFUENTES DE ECHAVARRÍA en contra de la AFP PORVENIR.

Decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

## **ANTECEDENTES**

El A quo tras considerar que los accionantes se encontraban en condición de dependencia económica respecto de su hijo fallecido, Juan Manuel Echavarría Cifuentes, condenó a la accionada al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, con efectos desde el 21 de agosto de 2016, descontando de ello lo ya pagado como devolución de saldo. De igual forma ordenó el pago de los intereses de mora causados desde el 26 de diciembre de 2016 hasta la cancelación de la obligación.

Inconforme con la decisión fue impugnada por la accionada, quien difiere de las conclusiones del A quo ya que a su juicio no se demostró que con ocasión de la muerte del afiliado hayan desmejorado las condiciones de vida de los demandantes, pues conforme indicaron los testigos, estos son propietarios de un vehículo, de donde deduce que poseen recursos para atender su sostenimiento, de lo contrario habrían lo vendido, aunado a que residen en una vivienda propiedad de una hija, lo que los exonera del pago de renta. Se opuso a la condena por intereses de mora, los que calificó solo se generan cuando la entidad se abstiene de pagar una prestación previamente reconocida. Además, alega que no hay lugar a la condena en costas ya que la entidad obró de buena fe.

## **ALEGATOS**

Concedido el término de traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020 la parte accionante solicitó la confirmación de la sentencia condenatoria, en tanto se demostró el requisito de dependencia económica de los accionantes respecto a su hijo fallecido, dependencia que a juicio de la jurisprudencia no debe ser total, sino determinante y suficiente para variar negativamente las condiciones de vida de los padres.

A su vez la parte demandada disiente de la valoración probatoria, pues a su juicio de los dichos de los testigos son de oídas y no se revela la predcada dependencia económica, la que además se niega por los accionantes al indicar que tienen otros hijos, quienes contribuyen a su sostenimiento, además que el fallecido Juan Manuel atendía cubría sus gastos propios.

### **CONSIDERACIONES**

Previo a resolver la presente controversia encuentra la Sala pertinente expresar que en el presente evento se encuentran por fuera de discusión: **1)** Que Julio Ernesto Echavarría y Griselda Esther Cifuentes de Echavarría son los padres de Juan Manuel Echavarría Cifuentes (fl. 11), quien falleció el 21 de agosto de 2016 (fl. 12) **2)** Que Juan Manuel Echavarría desde junio de 2009 se afilió a AFP Horizontes Pensiones y Cesantías, hoy Porvenir SA (fl. 61), entidad a la que realizaba cotizaciones al momento de su deceso, efectuando aportes por más de 50 semanas en los 3 años anteriores a su deceso, tal como lo acepta la accionada en la contestación de la demanda (acápite de oposición a las pretensiones. Fl. 36) y que se verifica en la historia laboral de folios 13 y 64/67 que reporta cotizaciones discontinuas con la accionada entre enero de 2014 y agosto de 2016, totalizando con esta accionada más de 104 semanas en los 3 años anteriores al deceso; **3)** Que el 25 de octubre de 2016 los accionantes solicitaron a la AFP Porvenir el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes (fl. 76/79) , siendo negada por no acreditar la dependencia económica respecto del afiliado fallecido (fl. 16 y 80) y **4)** Que la accionada en diciembre de 2016 reconoció a los demandantes la devolución de saldos, consignado la suma de \$1'690.698 en favor de cada uno de los accionantes (fls. 81/82), pago que fue aceptado por los accionantes en el interrogatorio de parte llevado a cabo el 29 de agosto de 2018 (fls. 90/92)

Así las cosas, atendiendo las premisas expuestas y los aspectos objeto de apelación, estando por fuera de discusión que el afiliado Juan Manuel Echavarría Cifuentes dejó causada la pensión de sobrevivientes, ya que cotizó más de 50 semanas en los 3 años previos a su fallecimiento, corresponde a esta corporación determinar si los actores se hallaban en condición de dependencia económica respecto a su hijo fallecido, esto en los términos del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

Frente a la dependencia económica que predica la norma, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-111 de 22 de febrero de 2006, declaró inexecutable la expresión “de forma total y absoluta” contenida en el literal mencionado, por considerar que dicha exigencia hace nugatoria la posibilidad de los padres, de acceder a la pensión de sobrevivientes derivada del fallecimiento de sus hijos, desconociendo el principio constitucional de proporcionalidad, en la medida en que sacrifica derechos de mayor entidad como el mínimo vital y el respeto a la dignidad humana, y principios constitucionales como la solidaridad y la protección integral a la familia.

En igual sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que debe distinguirse entre la simple ayuda o colaboración propia de la solidaridad familiar, de la dependencia material que existe de los padres a los hijos, la cual se acredita cuando, en ausencia de los ingresos que el hijo procuraba a sus progenitores se produce un cambio sustancial de las condiciones de su subsistencia, el que no se asimila a un estado de indigencia o mendicidad, ya que la existencia de algunos recursos propios, ayudas externas o incluso la tenencia de vivienda, no hacen desaparecer tal calidad de dependiente (al respecto la sentencia SL 650 de 2020 y 5605 de 2019)

De cara a lo narrado fueron analizadas las pruebas aportadas al proceso, siendo escuchados los testigos Carmen Leyla Barrera, Luis Mariano Gallo y Gerardo Zapata, quienes se anunciaron como vecinos de los demandantes, expresando

que la pareja procreó 4 hijos, sin embargo, para el momento del fallecimiento de Juan Manuel solo vivían con éste, pues las 3 hijas restantes habían constituido su propio hogar. Señalaron que las cargas económicas de este hogar eran atendidas conjuntamente por Juan Manuel y el padre, Julio Ernesto Echavarría.

La testigo **Carmen Leyla Barrero**, refirió que Griselda Cifuentes en el pasado trabajó, pero cesó tal condición 10 ó 15 atrás, por lo que no tiene recursos económicos que garanticen su subsistencia, siendo cubiertas todas sus necesidades por su esposo y por su hijo Juan Manuel, cuando este vivía.

Calificó a Juan Manuel como un buen muchacho, quien no tenía novia o hijos, además era muy casero, siempre estaba pendiente de las necesidades de sus padres, ya que se encargaba de suministrar el mercado y pago de servicios públicos.

En lo atinente a Julio Ernesto, relató que es pensionado, no sabe su monto, pero la califica como no muy cuantiosa pues debe acudir a préstamos para completar lo necesario para el hogar.

Narró que la pareja no tiene una vivienda propia, en tanto aquella que habitan pertenece a Susana, hija mayor de la pareja, quien no cobra a sus padres un canon de arrendamiento, pero si deben éstos pagar los impuestos y mantenimiento de la casa.

A su vez **Luis Mariano Gallo**, relató que Juan Manuel siempre contribuyó al sostenimiento de sus padres, pues prestó servicio militar y luego consiguió empleo en una empresa de vigilancia, en ambos eventos destinaba sus ingresos a sus padres. Relató que con ocasión de la muerte de Juan Manuel las condiciones de vida de sus padres han desmejorado, al punto que Julio Ernesto acude a préstamos informales, con altos porcentajes de interés.

Dificultades económicas que fueron narradas por **Gerardo de Jesús Zapata**, quien relató que en ocasiones ha prestado dinero a Julio Ernesto, además que es conocedor que aquel acude a los créditos “paga diario”.

Por otra parte se aprecia el documento nominado “*formulario de solicitud por sobrevivencia para padres*” que indica las circunstancias de la muerte del afiliado, identifica a los solicitantes como casados, sin divorcio, enuncia que el afiliado vivían con sus padres y respecto a los ingresos del núcleo familiar al momento del fallecimiento, se reporta la mesada pensional del padre Julio Ernesto y se indica que la accionante Gricelda es ama de casa sin ingresos, por lo que los padres refieren: “declaro que al momento del fallecimiento de mi hijo (a) Juan Manuel Echavarría C, dependía económicamente de él (ella). (fls. 76/78)

Documento que no ofrece datos adicionales, no indaga por las condiciones de vida de los solicitantes, sus bienes, ingresos, o contribuciones de terceros; como tampoco por los aportes del fallecido al hogar, sus gastos propios, ni la forma como se asumieron las obligaciones con posterioridad a su fallecimiento.

Son estas las pruebas aportada al proceso, las que para esta corporación resultan suficientes para establecer que Julio Ernesto Echavarría y Gricelda Cifuentes se hallaba en condición de dependencia económica respecto a su hijo fallecido Juan Manuel Echavarría.

Se destaca que los testimonios merecen total credibilidad ya que sus dichos muestran total espontaneidad, narra aquello que conocieron dada la cercanía al hogar, por ser vecinos y compartir frecuentemente con los demandantes.

Precisa la sala que la pregonada de dependencia económica no desaparece en atención a que el demandante Julio Ernesto sea pensionado con una mesada equivalente al mínimo legal, pues tal como relataron los testigos, tal ingreso

resulta insuficiente para atender las necesidades del hogar, teniendo presente la señora Gricelda no genera ingreso alguno.

Se destaca que, contrario a lo afirmado por la accionada en la sustentación del recurso de apelación, la tenencia de un vehículo por sí solo no es prueba de solvencia económica; más aun cuando no se demostró que fuera un vehículo lujoso, o que su tenencia demandara más gastos que el beneficio que produce para el transporte de la familia.

Tampoco se desdibuja la predicada dependencia económica por la contribución que brinda Susana, hija de los demandantes, quien proporciona la vivienda a sus padres, pues no resulta del todo gratuita, ya que a cargo de estos subsiste la contribución de impuestos y mantenimiento del hogar.

Llama la atención la corporación que las condiciones de dependencia económica o necesidad de contribución del fallecido se examinan conforme a las circunstancias propias de cada hogar y situados cronológicamente antes de la muerte del afiliado o pensionado.

Es así que en el caso concreto la prueba recaudada deja ver cómo las necesidades del hogar se satisfacían gracias a la ayuda común de sus miembros, quienes proporcionaban ciertos componentes vitales, sin que sea posible determinar cuál de ellos era el preponderante, pues en ausencia de cualquier contribución las condiciones de vida desmejoraría, tal como sucedió con la ausencia de Juan Manuel, sin que se desdibuje la predicada dependencia por los ajustes económicos que realizaron los solicitantes, acudiendo a créditos, en tanto el requisito examinado no es sinónimo de indigencia o de carencia absoluta de bienes o ingresos.

En cuanto a la prueba documental, en particular el documento que se titula “formulario de solicitud por sobrevivencia para padres” este no ofrece elementos

de oposición o réplica relevantes, en tanto solo da cuenta de la solicitud elevada, donde los accionantes no hicieron manifestación alguna que negara la condición de dependencia económica que ahora alegan. Por el contrario, se destaca que la investigación que realizó el fondo de pensiones accionado fue precaria, no acredita que hubiera escuchado a testigos, que realizara una visita al hogar, allegara soportes económicos, o alguna situación por la cual descarte la dependencia económica, la que exiguamente se sustentó en la calidad de pensionado del actor.

Así las cosas, será confirmada la decisión del A quo quien declaró la calidad de beneficiarios de los actores y ordenó el reconocimiento pensional, al cual se accederá concomitante a la muerte del afiliado, 21 de agosto de 2016, en cuantía de 1 SMLMV pues al ponderar los salarios base de cotización y aplicarle la tasa de reemplazo del 45% no se obtendría una mesada superior. Se reconoce a razón de 13 mesadas anuales por haberse causado con posterioridad del 31 de julio de 2011 (límite impuesto por el acto legislativo 1 de 2005) sin que ninguna de las mesadas se encuentre afectada por la prescripción extintiva ya que la reclamación del derecho fue adelantada dentro de los tres años siguientes a su consolidación, (octubre 25 de 2016- fl. 76) como también la presentación de la demanda, esto es el 2 de abril de 2018 (fl. 5)

Calculado el retroactivo pensional causado hasta el 31 de agosto de 2020 asciende a **CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$ 41'209.194)**, divididos en partes iguales para cada accionante, esto es **VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$20'604.197)** suma de la cual se descontarán los aportes para el sistema de seguridad social en salud y se compensará aquello ya reconocido como devolución de saldos que correspondió a \$1'690.698 en favor de cada accionante, más su indexación (fl. 81/82)



Año	Valor mesada	N° mesadas	Sub total	valor en favor de cada accionante
2016	\$ 689.455	5,33	\$ 3.674.795	\$ 1.837.398
2017	\$ 737.717	13	\$ 9.590.321	\$ 4.795.161
2018	\$ 781.242	13	\$ 10.156.146	\$ 5.078.073
2019	\$ 828.116	13	\$ 10.765.508	\$ 5.382.754
2020	\$ 877.803	8	\$ 7.022.424	\$ 3.511.212
Total			\$ 41.209.194	\$ 20.604.597

A partir del 1° septiembre de 2020 la accionada seguirá cancelando la mesada pensional en cuantía de 1 SMLMV a razón de 13 mesadas anuales.

Respecto a los intereses de mora se resalta que los mismos se generan cuando, pese a presentarse una reclamación con las pruebas que sustenten su causación, la administradora de pensiones excede los plazos que se le conceden para pronunciarse. Término que para los eventos de pensión de sobreviviente es de dos meses (2) tal como lo establece el artículo 1° de la Ley 717 de 2001.

Sobre la imposición de los mismos, la Sala de Casación Laboral C.S.J ha indicado que habrá lugar a sustraerse de tal condena cuando la negación del derecho deviene de un apego juicioso a la norma existente (al respecto la sentencia SL 508 de 2020). Excepción que no se observa en el presente evento, en tanto pese a emitirse una respuesta dentro del plazo concedido, ella no refleja ser producto de un estudio de las condiciones de vida del afiliado y los solicitantes, no se demuestra haber realizado entrevistas a los actores o personas allegadas y mucho menos se acompañan a las posturas que de forma consistente y pacífica han construido los órganos de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral y constitucional; razones suficientes para imponer los deprecados intereses.

De igual se confirmará la condena en costas a cargo de la AFP Porvenir, las que también se imponen en esta instancia, por resultar vencidas las réplicas en esta instancia. se tasan las agencias en derecho en la suma de 3 SMLMV

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de decisión laboral **CONFIRMA** el reconocimiento pensional en favor de Julio Ernesto Echavarría Ruiz y Gricelda Esther Cifuentes de Echavarría, cuyo retroactivo calculado entre el 21 de agosto de 2016 y el 31 de agosto de 2020 asciende a **CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$ 41'209.194)**, divididos en partes iguales para cada accionante, esto es **VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$20'604.197)** suma de la cual se descontarán los aportes para el sistema de seguridad social en salud y se compensará aquello ya reconocido como devolución de saldos, con su debida indexación.

En lo demás se confirma la sentencia recurrida.

Costas en esta instancia a cargo de la accionada, de las que se tasan las agencia en derecho en la suma de 3 SMLMV

Lo resuelto se notifica a las partes en ESTADOS. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

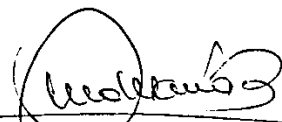
Los Magistrados,



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por ESTADOS No. 139 fijados hoy en la secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín a las 8 a.m. Medellín, **Septiembre 24 de 2020**